

República Dominicana: el penoso
derrotero de la democracia

**Tras doce años de semidictadura balaguerista,
el país entra en una fase de apertura
democrática que hoy parece languidecer ante la profunda
crisis socioeconómica y la injerencia norteamericana**

El 16 de agosto de 1982 fue instalado como presidente constitucional de República Dominicana el Dr. Salvador Jorge Blanco, con el aval de cerca del 46% de los votos emitidos. Era este el segundo triunfo electoral consecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, oficialmente adscrito a la Internacional Socialista y compromisorio de una “revolución democrático-nacional” conducente a la instauración del socialismo democrático en la media isla caribeña. En particular el Dr. Jorge Blanco, conocido abogado vinculado a los grandes grupos burgueses de Santiago de los Caballeros, había realizado una briosa campaña electoral que recordó los mejores tiempos del populismo latinoamericano, cuyo principal slogan había sido la promesa de realizar la “democracia económica” en el país. Tres meses después de instalarse en la silla presidencial, suscribió un Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional que fue ratificado por el Consejo Ejecutivo de la entidad el 21 de enero de 1983. Desde agosto de 1983, a sólo un año de inaugurado el gobierno, República Dominicana comenzó a vivir un clima de agitación social y política condimentado con ciclos represivos que tuvieron su máxima expresión en abril de 1984, cuando el Presidente ordenó una redada represiva a gran escala al costo de más de un centenar de muertes y miles de heridos y detenidos.

Los analistas de la situación dominicana habían previsto que el Dr. Jorge Blanco iba a tener dificultades para instaurar la democracia económica, construir el “socialismo democrático” o hacer una difusa pero atractiva revolución democrático-nacional. Pero lo que resultaba difícil prever era que bajo el mandato de aquel candidato carismático y sonriente, reputado civilista que se distinguió en la lucha contra la represión imperante durante los doce años de balaguerismo (1966-1978), la débil apertura democrático-liberal iba a retroceder hasta el punto de teñir de sangre popular las hasta entonces impolutas banderas blancas del perredeísmo.

EL PECADO ORIGINAL

En 1978 el presidente Joaquín Balaguer, instalado en el poder doce años antes sobre las ruinas del movimiento popular de abril de 1965 y con el apoyo de los Estados Unidos, se vio obligado a entregar el poder al candidato de la socialdemocracia local, un rico ganadero

nombrado Antonio Guzmán. Guzmán heredó una situación económica difícil. Si entre 1969 y 1974 el país vivió un período de bonanza económica con crecimientos anuales del PIB cercanos al 10%, a partir del último año señalado se produjo un receso en el ritmo de crecimiento hasta situarse en un 3,8% en 1978¹. Estos índices negativos, y otros que omitimos por falta de espacio, indicaban la paulatina bancarrota del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que había constituido el eje de la dinámica económica durante los años de bonanza. Obviamente, no eran ajenas a esta situación las dificultades del sector externo dominicano.

De hecho el modelo sustitutivo de importaciones había creado una planta industrial parasitaria, no rentable fuera del marco de un fuerte proteccionismo estatal, y que al mismo tiempo que consumía cuotas importantes de divisas —en la medida de importaciones de materias primas, combustibles, etc.— no generaba exportaciones, dada su incapacidad para competir en el mercado mundial. Simultáneamente, el agravamiento de la crisis del sector agropecuario determinó voluminosas importaciones de alimentos, incluso de aquellos de los que República Dominicana había logrado autoabastecerse tradicionalmente. Sin embargo, hasta 1975 varios factores habían hecho tolerable esta situación desfavorable. En primer lugar, las exportaciones financiadoras del modelo, los productos tradicionales —azúcar, café, cacao y tabaco, principalmente la primera— gozaron de precios relativamente favorables en el mercado mundial o fueron beneficiados con cuotas benevolentes en el mercado norteamericano. En segundo lugar, el período analizado se caracterizó por la recepción de fuertes inversiones extranjeras en diversas esferas como la industria, las finanzas, el turismo y sobre todo la minería. En tercer lugar, como parte de su estrategia contrainsurgente, los Estados Unidos proporcionaron, directamente o a través de intermediarios, importantes donaciones y préstamos blandos. Así, por diferentes conceptos, entre abril de 1965 y agosto de 1970 se recibieron cerca de 267 millones de dólares, y entre 1970 y 1974 unos 78,6 millones.

Por último, dadas las características del mercado de capitales en el período, la vía del endeudamiento externo fue utilizada como recurso final para la estabilización de la casi siempre deficitaria balanza de pagos. Si hacia 1961 —cuando fue ajusticiado el dictador Trujillo— la deuda externa era insignificante y en 1966 sólo llegaba a 158 millones de dólares, hacia 1973 rondaba los 600 millones y su servicio ocupaba el 15,6% de las exportaciones.

A partir de 1974 desapareció la coyuntura favorable. Se redujeron los precios de los productos básicos de exportación, se incrementaron los gastos por importación de combustible, bienes de capital, se constriñeron los flujos inversionistas y de asistencia económica y se endurecieron las condiciones para el endeudamiento. En 1978 el déficit de la balanza comercial ascendía a 326 millones de dólares, seis veces superior a la de 1973. La

¹ Las cifras estadísticas aquí presentadas provienen fundamentalmente de los Estudios económicos de América Latina de CEPAL y de los boletines estadísticos del Banco Central de República Dominicana. Para una mayor precisión, consultar nuestro trabajo Crisis del desarrollismo y tendencias neoliberales en República Dominicana, Avances de Investigación. CEA. La Habana. 1984, capítulos I y III.

deuda externa del país se había incrementado en algo más de un 100% y el servicio absorbía el 21,4% de las exportaciones.

Ante esta situación, el presidente Guzmán prometió tomar las medidas necesarias para reactivar la economía y superar el estado de crisis latente que sufrió el país. Sus esperanzas las centró en lo que fue denominado Modelo de Demanda Inducida (MDI), proyecto de corte neokeynesiano que pretendía “complementar la inversión privada a través del manejo de la demanda agregada cuando esta resultara insuficiente para mantener un nivel aceptable de utilización de la capacidad instalada y el empleo”².

Sin entrar en pormenores, lo cierto es que el proyecto económico de Guzmán respondía también a las demandas populares de satisfacción de ciertas necesidades básicas —empleo, salud, educación— y al imperativo de resguardar las clientelas políticas en un país donde la reelección es el hobby preferido de los presidentes. Al efecto, Guzmán dilató considerablemente la empleomanía estatal —tanto en el gobierno como en las empresas públicas—, decretó un magro aumento salarial y engrosó las partidas presupuestales dirigidas a la educación y a la salud. Con ello la política económica del PRD en el gobierno revertía la tendencia a la austeridad del gasto corriente típico del balaguerismo, al tiempo que intentaba sostener el mismo modelo económico, aun cuando con un mayor énfasis en el fomento agrícola.

El equipo técnico de Guzmán había cifrado el éxito del MDI en la existencia de tres precondiciones: a) un saludable sector externo que proveyera suficientes divisas para afrontar las necesidades de la capacidad industrial instalada y de las ampliaciones potenciales; b) un sistema de ingresos fiscales en ampliación capaz de suministrar fondos para la dilatación de los gastos corrientes sin afectar el papel dinamizador del sector público a través de incrementos paralelos del gasto de capital; y c) un sector privado dinámico y elástico capaz de ser estimulado por la ampliación de la demanda y de protagonizar un ciclo inversionista sostenido donde el capital transnacional tendría un papel fundamental.

Sin embargo, ninguna de estas precondiciones existieron, por lo que el MDI fue rápidamente sepultado por el galopante deterioro económico y sustituido por un incoherente plan de austeridad puesto en vigor desde mediados de 1980. Así, el PIS nacional logró un cierto repunte en 1979 y 1980 —con un 4,8% y 5,6% respectivamente—, pero fundamentalmente debido al alza de las actividades de servicios endosado por una coyuntura externa relativamente favorable. Pero en 1981 la tasa de crecimiento se redujo al 3,4% y al 1,6% en 1982.

El sector externo sufrió notablemente en el período señalado. Por un lado; la incapacidad de los sectores productivos mercado-internistas para responder a los magros incentivos del MDI se tradujo en un notable aumento de las importaciones, en lo cual también incidió

² Miguel Ceara: Tendencias estructurales y coyuntura de la economía dominicana, Editora Nuevas Rutas, Santo Domingo. Julio de 1984. p. 224.

decisivamente el incremento de los precios del petróleo y de otros rubros. Para citar un ejemplo, en 1980 las exportaciones crecieron un 10,7% favorecidas por el aumento de los precios del azúcar y por mayores ventas de oro, Pero las importaciones lo hicieron en un 33,6%, para un déficit comercial récord de 647 millones de dólares en un país donde las exportaciones totales rondan los 1 000 millones de dólares. En la práctica el gobierno de Guzmán acumuló una cadena de déficit —comercial, de la balanza de pagos, presupuestario— que sólo pudo financiar mediante el recurso del endeudamiento externo, al menos mientras este recurso fue asequible. Voluminosos préstamos en condiciones muy onerosas fueron contratados para financiar los déficit de las empresas estatales o para pagar deudas vencidas, al punto de que hacia 1981 la deuda externa nacional se acercaba a los 2 000 millones de dólares y absorbía más del 30% del total de las exportaciones³.

A partir de este último año la capacidad de endeudamiento estaba llegando a un límite que dificultaba el acceso a una banca comercial recelosa de las posibilidades de pago de su empobrecido cliente. El gobierno procedió a drásticas medidas de austeridad limitativas de las importaciones, de supresión de subsidios, al mismo tiempo que intentaba contrarrestar los déficit presupuestarios mediante la emisión de dinero sin respaldo real con los consiguientes efectos negativos.

El gobierno fue perdiendo paulatinamente la amplia base de apoyo que le otorgó el torneo electoral de 1978. Para las masas populares el cambio prometido se había reducido a la instauración de ciertas libertades públicas que no bastaban para alimentarse, conseguir un empleo o asegurar los servicios sociales básicos. Tras el derrumbe de las expectativas generadas por el MDI, la situación popular empeoró drásticamente, al descargarse sobre las masas todo el peso de la crisis y de los programas de austeridad. Sin embargo, dado el bajo nivel de organización popular y la carencia de una estrategia orgánica, la impopularidad del gobierno sólo se expresó en protestas aisladas y en una reorientación de las preferencias políticas dentro del sistema, más aún si tenemos en cuenta que ya por entonces estaban cerca los comicios electorales de 1982.

El propio Partido Revolucionario Dominicano volvió las espaldas a su gobierno, argumentando su política exterior ultrarreaccionaria, y de hecho buscando un distanciamiento de una gestión muy desprestigiada en la perspectiva de un nuevo triunfo electoral donde, se decía, a la “democracia política” asegurada por Guzmán se agregaría la “democracia económica”.

³ Según Ceara Hatton en su ya citada obra el servicio de la deuda externa global (pública, privada, a corto, mediano o largo plazo) absorbía en 1981 el 51 % de las exportaciones y su monto excedía el 28% del PIB. Ceara menciona otros mecanismos descapitalizadores, tales como el cese del flujo inversionista, el incremento de las remesas de utilidades y la fuga de capitales. Valga citar que entre 1980 y 1983 el flujo de capital hacia depósitos en bancos norteamericanos de residentes en la República Dominicana alcanzó un promedio anual de 62,3 millones de dólares y en este último año el monto depositado superaba los 657 millones.

Pero es sobre todo la sórdida oposición de las clases dominantes la que nos interesa destacar aquí. Para la burguesía dominicana, y sobre todo para su fracción hegemónica del gran capital nativo asociado al capital imperialista, el gobierno de Guzmán había cometido algunos pecados imperdonables: una corrupción desmedida de los funcionarios públicos, un abultado déficit presupuestario debido a los “excesos populistas” en el manejo de los gastos corrientes, como consecuencia una disminución de los gastos de capital y la utilización de recursos “desestabilizadores” para compensar el déficit, etc. Una sarta de acusaciones que fueron ruidosamente espetadas al Presidente en folklóricas cenas de “confraternidad empresarial” y donde no faltaron burdas acusaciones como aquella de Payo Ginebra cuando denunciaba las supuestas tendencias “estatistas” del gobierno, “una suerte de comunismo sin doctrinas” que “limitaba morbosamente el derecho a hacer fortuna”.

El distanciamiento de la burguesía del que efectivamente era su gobierno, fue acentuándose paulatinamente a partir de 1980, y tuvo su mayor expresión en las posiciones adoptadas por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, órgano cúpula de la burguesía.

LA ALTERNATIVA DEL GRAN CAPITAL Y DEL IMPERIALISMO A LA CRISIS

Para el movimiento popular y progresista del área el recuerdo del gobierno de Guzmán no puede ser grato. Fue este un gobierno que se inclinó dócilmente a los más abyectos planes del imperialismo en la región; que apoyó los esfuerzos norteamericanos por impedir el triunfo revolucionario en Nicaragua; que condenó la Declaración Franco-Mexicana de 1981; que cooperó activamente con el régimen duvalierista; que extremó sus posturas anticubanas, entre otros hechos negativos. Pero, al mismo tiempo, es justo reconocer que en cuanto a libertades públicas y políticas económicas, este gobierno debe considerarse lo más avanzado que ha producido la disoluta socialdemocracia local, aun cuando ello nunca fue suficiente para solucionar o al menos paliar los graves problemas nacionales.

Decir aquí que el gobierno de Guzmán estuvo al servicio de la reproducción del capitalismo dependiente es una verdad tan simple que se pudiera omitir. El problema estriba en que el rico ganadero del Cibao y sus equipos económicos fueron incapaces de entender que la nueva dinámica del capital imperialista imponía un nuevo estilo de política económica, muy distante del MDI y mucho más coherente que los programas de austeridad impuestos desde 1980. No pudieron prever que —siguiendo la lógica del capitalismo dependiente— en el marco de la crisis se imponían severos ajustes de matices neoliberales y una reorientación de la producción hacia la exportación en lugar del derruido modelo desarrollista sustitutivo de importaciones. La incapacidad para comprender esta nueva dinámica, sin embargo, no se reduce a una mera torpeza técnica de las burocracias o a los anhelos reeleccionistas de Guzmán, aun cuando estos factores incidieran en dicho comportamiento. En la base yacía la propia incapacidad del gran capital local para organizar sus intereses, producir una elaboración intelectual básica y articular un cierto consenso en torno a la alternativa neoliberal. El propio CNHE, portavoz de una jerga friedmaniana poco elaborada, no podía considerarse en este período inicial como representativo no ya de toda la burguesía, sino ni

quiera de toda la gran burguesía, en la misma medida en que importantes grupos económicos no habían logrado aún ingresar en aquellas áreas lucrativas ubicadas en el eje del nuevo esquema de acumulación y privilegiadas con tasas de ganancias superiores. De esta manera, el gran capital acusaba al gobierno de sus mismas debilidades y, como él, utilizando una gráfica expresión de Lucas Vences, se movía de “forma contradictoria y sin norte estratégico”⁴.

Esta compleja situación comenzó a ser superada hacia fines de 1981, y tuvo su expresión pública en la elaboración por el CNHE de un programa orgánico de corte neoliberal y, a partir de ahí, en la articulación de un conjunto de presiones más directas y eficaces sobre el gobierno.

Un papel importante en estas elaboraciones lo tuvieron un grupo de “intelectuales patentados” vinculados al CNHE y llamados posteriormente a ocupar puestos claves en la conducción económica del país. Precedido de una serie de artículos, libros, ponencias y charlas⁵, en octubre de 1981 se dio a conocer un documento elaborado por una comisión del CNHE donde se proponía explícitamente la liberalización económica, la reducción cuantitativa del papel del Estado en la economía a una “supervisión global”, limitar todo plan distributivo al libre flujo del mercado y una acción más consecuente en función del fortalecimiento del sector privado.

El paquete de recomendaciones concretas incluía la recurrencia al FMI⁶. Conviene detenernos en este punto. Desde 1902 hasta la fecha un rasgo distintivo del proceso político dominicano ha sido la influencia determinante de los Estados Unidos, influencia de marcado carácter semicolonialista. No hay un hecho decisivo en la historia política nacional, un viraje de los acontecimientos en los que los Estados Unidos no hayan tenido un papel fundamental. El nuevo viraje programado por el CNHE no escapaba a esta trágica regularidad. Sería el imperialismo norteamericano el encargado de proveer los dos mecanismos claves para la reestructuración neoliberal de la economía dominicana: el Fondo Monetario Internacional y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. En torno a estos dos vectores se organizó el consenso empresarial y se articuló definitivamente la reaccionaria alternativa del CNHE. El papel desempeñado por el gobierno norteamericano excedió con mucho las prerrogativas diplomáticas. En documentos oficiales de la Embajada y de la AID; en intervenciones públicas del embajador, funcionarios diplomáticos diversos o de representantes de la Cámara Americana de Comercio, en una serie de contactos públicos o semipúblicos con dirigentes empresariales y gubernamentales fue creciendo la presión sobre el gobierno para adscribir la política económica nacional incondicionalmente a la “magia libre del mercado” y a otros preceptos usuales en el cacofónico discurso reaganiano. Así, en una declaración pública el entonces embajador Yost condicionó el apoyo norteamericano al gobierno a “la puesta de la

⁴ Lucas Vences: Crisis económica 1978-1982, Editora Alfa y Omega, Santo Domingo, 1982.

⁵ Entre otros, pudiéramos mencionar el libro de Eduardo Tejera Diagnóstico de la economía dominicana (1979-1981) y recomendaciones preliminares; los artículos de Bernardo Vega recogidos en dos volúmenes: La coyuntura económica dominicana (1980-1981) Y Comentarios sabatinos (1981-1982), así como las sesiones de Forum, principalmente la..s dedicadas al sector público y al sector externo.

⁶ Cit. por J. Serrulle y J. Boin: ¿Hacia dónde va el país?, Ediciones Gramil, Santo Domingo, 1985.

casa en orden”, lo que ante todo se traduc  a en “la creaci  n de un clima favorable con la inversi  n extranjera”⁷, Iguales criterios aparec  an en un informe de la Embajada, donde se clamaba por la liberalizaci  n econ  mica a pesar de los recelos de algunos grupos pol  ticos y de “algunos segmentos de la comunidad empresarial”⁸.

Al abrazar como propio el recetario fondomonetarista y convertir la recurrencia a este organismo en su bandera de combate, el gran capital trataba de conseguir lo que por s   mismo no hab  a podido: ajustar la pol  tica econ  mica nacional a sus estrechos intereses fraccionales, sujetar a las d  scolas burocracias gubernamentales y crear las condiciones   ptimas para la acumulaci  n mediante una dr  stica restricci  n del consumo popular y el sacrificio de las capas medias y del sector empresarial mediano mercadointernista. La ICC ven  a a complementar la estrategia fondomonetarista, fijando las metas para la recuperaci  n econ  mica mediante una supuesta expansi  n productiva ilimitada como supuestamente ilimitado era el destino final de esa producci  n: el mercado norteamericano. La ICC era la luz al final del sombr  o t  nel fondomonetarista; un slogan atractivo en torno al cual se aglutinaron los diferentes grupos empresariales, aun cuando muchos de ellos, al defender el programa del CNHE, obraban como aquel personaje de Moliere que hablaba en prosa y no lo sab  a.

Sin embargo, ya por entonces las miras del gran capital no estaban situadas en el ag  nico gobierno de Guzm  n, sino en el que provendr  a de las elecciones a celebrarse en mayo de 1982, Al efecto, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) declar  o en febrero de ese a  o su aspiraci  n de situar empresarios en el Parlamento, lo que fue seguido por declaraciones de otro dirigente empresarial en favor de una actuaci  n p  blica m  s determinante del CNHE para contrarrestar “las corrientes estatistas y abiertamente perturbadoras” mediante “una estrategia congresional que tendr  a como objetivo la presentaci  n de aspirantes a cargos legislativos”⁹. Al d  a siguiente *El Nuevo Diario* public  o un documento del CNHE donde precisaba con m  s detalles el contenido de esa estrategia.

En primer lugar, el CNHE expresaba su inter  s por lograr una presencia directa en el nuevo gobierno con el fin de promover “un estado de cosas favorable a nuestros intereses” y “l  neas program  ticas que le garanticen la preservaci  n del sistema y la vigencia de su influencia en todas las eventualidades electorales”, La v  a para esto eran los partidos pol  ticos.

En primera instancia se atend  a a la ultraderecha nucleada en el Partido Reformista, al que se le exig  a un remozamiento general (organizativo, ideol  gico mediante su adhesi  n al social cristianismo) y un proceso de fusi  n con otras colectividades m  s peque  as como el Partido Quisque  ano Dem  crata (POD, de El  as Wessin Wessin), el Movimiento Institucional Democr  tico Antireeleccionista (MIDA, de Francisco Augusto Lora) y el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), El PR deber  a recibir asistencia econ  mica regular

⁷ *El Nuevo Diario*, 26 de noviembre de 1981.

⁸ Investment Climate Report on the Dominican Republic, 27 de noviembre de 1981.

⁹ *El Nuevo Diario*, 17 de febrero de 1982.

y estable, lo cual es comprensible si tenemos en cuenta la amarga experiencia sufrida con el PRD en el poder y la vocación ultraderechista (e incluso militancia reformista) de los máximos dirigentes del CNHE. Respecto al PRD el tanteo era más cuidadoso, pues sólo recibiría ayuda financiera “en la medida de que nuestros hombres allí nos lo aconsejen”. El consejo favorable estaba condicionado a la posibilidad de cercar al candidato perredeísta de una serie de figuras del sector empresarial a ser nombradas como asesores económicos y miembros del gabinete¹⁰.

Al margen de otros comentarios, el CNHE había logrado presentar para las elecciones un programa económico y un plan de acción sumamente eficaz, como quedaría demostrado en los meses venideros.

El candidato con más posibilidades de éxito, el Dr. Salvador Jorge Blanco, captó rápidamente el mensaje del gran empresariado y absorbió a varias figuras ligadas a este medio, como los economistas Milton Messina y Bernardo Vega y el empresario José A. Najri. El predominio de una línea de corte monetarista en el equipo económico se puso en evidencia cuando en marzo-abril de 1982 fue elaborado un plan de acción confidencial que establecía la aplicación de una serie de medidas recesivas y desnacionalizadoras casi totalmente alineadas con el programa del CNHE de octubre de 1981, e incluía la recurrencia al FMI y el estímulo a las exportaciones de acuerdo con los incentivos de la ICC¹¹.

APARIENCIAS Y REALIDADES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El maquiavélico documento secreto elaborado por Bernardo Vega —nombrado gobernador del Banco Central— sirvió de programa económico al gobierno de Salvador Jorge Blanco, un programa económico neoliberal que tendía a favorecer a los sectores más concentrados del capital ubicados en las áreas financieras y exportadoras —básicamente en las exportaciones no tradicionales— en detrimento de los sectores burgueses menores ligados al mercado interno, las capas medias y las masas populares. Este reordenamiento económico del capitalismo dependiente se hizo bajo el signo de los programas fondomonetaristas —cuyo interés primordial es situar al país en condiciones de pagar a los acreedores internacionales—, que de hecho venían aplicándose parcialmente desde 1980 y que serían oficializados en enero de 1983 con la firma del Acuerdo de Facilidad Ampliado con el FMI.

El equipo técnico del gobierno diseñó una optimista estrategia que se componía de medidas recesivas o “poco simpáticas”, “un marco de referencia dentro del cual se estimula la actividad privada” y se “liberalizan las fuerzas dinamizadoras del empresariado” aun cuando “en este proceso de ajuste de la economía algunos sectores empresariales sufren, mientras otros se benefician”, precio necesario para “la eliminación del sesgo antiexportador de

¹⁰ *El Nuevo Diario*, 18 de febrero de 1982.

¹¹ *La Noticia*, 12 al 23 de octubre de 1983.

políticas anteriores”¹². A las medidas “poco simpáticas” se unían otras de incentivación, que paulatinamente irían copando la política económica oficial y dando lugar a una idílica recuperación económica. Inicialmente se pronosticaron tres meses de medidas “poco simpáticas”. En un discurso pronunciado 84 días después de su ascenso presidencial, Jorge Blanco declaraba alborozado que se había detenido el proceso de deterioro económico y que el país entraba “en la etapa de la consolidación del establecimiento de las bases seguras dentro de las cuales nuestra economía se revitalizará y despejará de nuevo”¹³

A fines de año concluía que había logrado “la puesta de la casa en orden” y el inicio de la vitalidad económica¹⁴.

La liviana euforia del Presidente y su equipo técnico se apoyaba en cifras oficiales parciales y tenía un fin claramente político que los hechos no tardarían en desmentir, pero antes de analizar el volumen de este desmentido conviene detenernos brevemente en el contenido de las medidas adoptadas.

A cambio del desembolso de 465 millones de dólares durante tres años, utilizables para el servicio de la deuda y atrasos comerciales, el gobierno se comprometió con el FMI a aplicar una serie de medidas liberalizadoras de las fuerzas del mercado de franco carácter recesivo. Sucintamente pudiéramos englobarlas en tres áreas fundamentales.

En el área monetaria —que podemos considerar el eje de los ajustes recesivos— se produjo la paulatina desaparición (ya en marcha durante el gobierno de Guzmán) del subsidio otorgado a industriales e importadores, al entregárseles un peso por un dólar para las compras en el exterior.

Esto implicó una devaluación de la moneda dominicana por vías administrativas en la misma medida en que los dólares tenían que ser adquiridos desde entonces en un mercado paralelo no controlado por el gobierno a un costo en moneda nacional muy superior al oficial y en tendencia alcista. En este mismo sentido se adoptaron otras medidas tales como restricciones crediticias y aumentos de las tasas de interés, todas las cuales, junto a otras de carácter fiscal, apuntaban en buena medida a la reducción de la masa monetaria circulante. Las consecuencias socioeconómicas de este proceso son notables. En primer lugar, al encarecer los costos de producción o de importaciones de los bienes de consumo, se tradujo en súbitas alzas de precios, con el consiguiente efecto negativo sobre el consumo popular. No es casual que las dos mayores jornadas de protestas populares —la de abril de 1984 y la de febrero de 1985— tuvieran lugar inmediatamente después del traspaso al mercado paralelo de divisas de las importaciones de medicinas, fertilizantes, cereales, etc., en la primera ocasión, y del traspaso del petróleo en la segunda, hecho que completó el proceso devaluatorio y condenó la igualdad del peso con el dólar a una simple ficción constitucional. En segundo lugar, fueron

¹² Bernardo Vega: Charla en la Cámara Americana de Comercio, 9 de marzo de 1983.

¹³ *El Nacional*, 9 de noviembre de 1982.

¹⁴ *El Nuevo Diario*, 1ro. de enero de 1983.

rudamente afectados los sectores industriales mercadointernistas, así como los importadores y los comerciantes minoristas; en unos casos por los aumentos insostenibles de los costos de producción; en otros por las reducciones sustanciales de las ventas en un mercado cada vez más restringido. En tercer lugar, y como contrapartida, la liberalización monetaria benefició de manera escandalosa a la banca comercial, controladora desde fines de 1983 del mercado cambiario, y a los grupos vinculados a las exportaciones, incluso a los supuestamente penalizados exportadores tradicionales, dados los diferentes incentivos cambiarios establecidos.

En el orden fiscal la política se dirigió hacia la máxima reducción del déficit gubernamental. En primera instancia se aplicaron una serie de nuevos impuestos y, dada la reticencia de las clases dominantes a los impuestos directos (como ya se había puesto de manifiesto durante el gobierno de Guzmán) fueron dirigidos básicamente al consumo y la circulación, con los consiguientes efectos inflacionarios. De ellos el más famoso ha sido el impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industriales (ITBI). Como contrapartida lógica, se proclamó la necesidad de constreñir el presupuesto y particularmente los gastos corrientes, lo cual había sido antecedido por algunos decretos como el de la reducción salarial de los empleados públicos. De igual manera, fueron reducidos los créditos a las empresas estatales mediante “topes trimestrales” supuestamente dirigidos a rehabilitar el dilatado sector público de la economía. Tal rehabilitación pasaba por medidas draconianas como despidos masivos, un ejemplo de lo cual fue la militarización de la Fábrica Dominicana de Cemento y la represión del sindicato, calificado por el “civilista” Jorge Blanco como “un modelo para rehabilitar empresas que se encuentran en iguales condiciones”¹⁵.

En el área del sector externo se dictaron algunas medidas temporales limitativas de las importaciones, además de otras que incidían indirectamente en igual sentido. Pero fue aquí donde se adoptó el grueso de medidas que, alineadas con los propósitos desnacionalizadores de la ICC, deberían producir la reactivación económica: se modificó la ley 861, reguladora de las inversiones extranjeras, ampliando aún más los incentivos, tal y como exigieron la Cámara Americana del Comercio y la embajada de los Estados Unidos; se produjeron medidas favorables para la inversión en áreas como la minería, el turismo, la agroindustria y las zonas francas industriales; se otorgaron graciosos incentivos a los exportadores, y sobre todo a los exportadores no tradicionales, entre otros.

Este muy breve recuento de las medidas económicas adoptadas por el “Gobierno de Concentración Nacional” nos lleva de inmediato a intentar una evaluación de sus resultados. Obviamente, muy pocas personas, fuera del Presidente y su estrecho círculo de corifeos palaciegos, estarían dispuestas a aceptar el éxito del programa a partir de la existencia de una reactivación económica. Así, en 1983 la economía creció un 3,9%, pero ninguna manipulación estadística pudo ocultar que tal crecimiento estuvo basado en el 30% reportado en la minería (por la entrada en funciones de la paralizada Falconbridge) y en el 14% de

¹⁵ *El Nacional*, 22 de marzo de 1983.

crecimiento en las construcciones, ciertamente muy discutible, dada la crisis manifiesta de este sector. En cambio, los sectores productivos no crecieron o lo hicieron sólo en muy pequeña escala. El déficit comercial ascendió a 529 millones de dólares debido al crecimiento mayor de las importaciones (3,3%) sobre las exportaciones (2,4%), lo que a su vez incidió en una balanza de pagos deficitaria en 154 millones. El espinoso asunto del déficit fiscal no fue más alentador: alcanzó cerca de 293 millones de pesos, 7,5 más que en 1982, y se emitieron cerca de 150 millones de los satanizados “pesos inorgánicos”. La República Dominicana —reconocía Jorge Blanco— estaba “en el vórtice de las crisis económicas y 1984 sería un año más severo aún”¹⁶.

Esto último lo comprendieron claramente las masas dominicanas cuando se lanzaron a las calles en abril de 1984. Y también lo entendieron —aunque a su modo— las tropas, cuando masacraron y fusilaron sin piedad a quienes reclamaban el derecho a una vida decorosa.

Los datos de 1984 resultan mucho más desalentadores aún —el PIB sólo creció un 1,5%—, y los obtenidos para los primeros cinco meses de 1985 son francamente catastróficos. En el período apuntado las exportaciones habían disminuido un 14,2% (60 millones en términos absolutos) debido al desplome de las ventas azucareras y de otros productos tradicionales, así como al insignificante incremento —un 3,2%— de los productos no tradicionales¹⁷. Según los pronósticos del Banco Central en este año, de no producirse ningún ajuste recesivo el PIB crecerá un 1,3%, pero no se descuenta que no crezca en lo absoluto o que decrezca ¹⁸.

Como señaló Ceara Hatton, al convertir la deuda “en el objeto central de la política económica”, el gobierno sustituyó cualquier estrategia a largo plazo por una visión cortoplacista y aniquiló cualquier opción de desarrollo futuro¹⁹. Pero si aún en el camino escogido se hubiera logrado algún éxito, al menos cabría la posibilidad de reconocerle al equipo económico la dudosa virtud de un deudor consecuente con sus deudas al costo de lo impredecible. Pero tampoco en esta esfera se logró avance alguno. Por razones de espacio omitimos aquí toda la historia de las negociaciones con el FMI, convertido de hecho en el omnímodo de la política económica oficial. A cambio de esta cesión de la soberanía nacional y del desastre económico originado, en 1983 el gobierno dominicano tuvo la oportunidad de renegociar un total de 565,6 millones de dólares, pero el resultado obtenido fue deplorable y no estuvo a la altura de las posibilidades erogativas del país. En 1985 las negociaciones, tanto con el Club de París como con la banca transnacional, arrojaron resultados similares a pesar de la opinión optimista de los negociadores. Según diversos analistas, sólo fue pospuesto parte del problema al costo de aumentar la deuda en varios cientos de millones de dólares, lo que no omite el pago de algo menos de 690 millones anuales durante el próximo quinquenio, aproximadamente dos tercios de las exportaciones de un país con un déficit comercial crónico²⁰.

¹⁶ Listín Diario, 28 de febrero de 1984.

¹⁷ *Última Hora*, 11 de julio de 1985.

¹⁸ *El Nacional*, 11 de julio de 1985.

¹⁹ Miguel Ceara: op. cit., p. 185.

²⁰ Abril, 4 al 11 de julio de 1985.

A pesar de la pasmosa elaboración estadística brindada en una declaración conjunta de los dominicanos que' participaron en el Diálogo Continental sobre la Deuda Externa celebrado en La Habana —la deuda externa dominicana constituye el 40% del PIS de 1984, cuatro veces las exportaciones de ese año y dieciséis veces el monto de reservas de divisas—,²¹ el gobierno dominicano se niega a reconocer su impagabilidad y persiste en satisfacer las leoninas demandas de sus acreedores. Aun cuando tal persistencia le obligue a desconocer en sus más elementales detalles sus funciones destinadas a preservar lo que eufemísticamente Lord Salfour llamaba “el reconocimiento de los fundamentos de la sociedad”.

Quizás basten algunos datos para comprender la calamidad social de República Dominicana. Según cálculos de los medios sindicales, entre agosto de 1982 y enero de 1983 perdieron sus empleos unas 20 000 personas²². Según los siempre subvaluados cálculos oficiales, el desempleo ronda el 30% de la PEA, pero deberá aumentar cerca de un 5% este año²³. Siguiendo los datos oficiales, en el transcurso de 1984 el costo de la vida se incrementó en un 100%, pero en los productos integrantes de la canasta familiar los precios se habían duplicado o triplicado²⁴. Si tenemos en cuenta que los salarios han permanecido regularmente congelados y que los aumentos dispuestos han sido insuficientes y poco respetados por los empleadores, entonces es perfectamente aceptable el cálculo que establece que el, 70% de la población capitalina se sitúa por debajo de la línea de la subsistencia y está sometida a un trágico proceso de depauperación fisiológica²⁵.

La afectación de los sectores empresariales medianos y pequeños también se ha hecho sentir. Según Ernesto Vilalta, máximo dirigente de los empresarios establecidos en la zona industrial de Herrera, las 162 industrias ubicadas allí estaban al borde de la ruina, y entre 1980 y 1984 se habían reducido las plantillas de 17 000 a 10 000 empleados, mientras que la generalidad de las plantas estaban operando con una capacidad ociosa cercana al 50%²⁶. La situación de Herrera —la obra más acabada del desarrollismo balaguerista— es sólo una muestra de la situación existente a nivel nacional. Así, hacia principios de 1985 se consideraban al borde de la quiebra unas 500 pequeñas empresas del Cibao que empleaban alrededor de 15 000 trabajadores²⁷, mientras que un vocero de la Cámara Dominicana de la Construcción afirmaba que ese sector estaba en pleno receso y viviendo “la peor etapa de toda su historia”²⁸.

A las notas anteriores podríamos agregar una avalancha de datos estadísticos y citas de todo tipo que muestran la cruda realidad de crisis económica y depauperación social que vive el

²¹ *Granma*, 2 de agosto de 1985.

²² Julio de Peña: “El costo de la vida, la situación del empleo y sus repercusiones en los trabajadores y sus organizaciones”. En *Forum* 8, Santo Domingo. 1983.

²³ *El Nacional*, 11 de julio de 1985.

²⁴ *El Nacional*, 25 de junio de 1985.

²⁵ Teófilo Díaz: “El FMI Y el convenio de préstamo con el gobierno dominicano”, CEPAL No. 15, Santo Domingo. CDII. *Boletín Informativo*, enero de 1985.

²⁶ *El Nuevo Diario*, 12 de mayo de 1985.

²⁷ *El Nuevo Diario*, 14 de enero de 1985.

²⁸ *Hoy*, 5 de junio de 1984.

pequeño país caribeño. Sin embargo, lo que nos interesa explicar es que tras estas cifras hay un proceso socioeconómico y político que hay que tomar en cuenta para evaluar el resultado de la política económica seguida bajo el gobierno de Jorge Blanco, una evaluación que parte de los objetivos clasistas puestos sobre la mesa el 16 de agosto de 1982. En este sentido, el proyecto de ajustes fondomonetaristas ha logrado efectos destructivos estratégicos, sobre todo el andamiaje de relaciones socioeconómicas desarrollistas, una purga del capital sobreacumulado y una constricción de consumo popular necesario para restituir las condiciones acumulativas óptimas en las áreas económicas privilegiadas por la nueva dinámica del capital transnacional. Que este proceso de reestructuración del patrón de acumulación no haya podido generar un proceso de crecimiento sostenido —en buena medida debido a las duras condiciones existentes en el sistema económico mundial en el que se inserta el capitalismo dependiente dominicano— es una cuestión importante que nos lleva directamente a discutir su viabilidad a cualquier plazo, pero que no puede ocultar que tras la orgía lucrativa del capital financiero transcurre un vertiginoso proceso de concentración y centralización de la producción y los capitales que altera sustancialmente la estructura social, las relaciones entre el bloque dominado y el bloque dominante, las formas de interacción entre las fracciones componentes de este último y, como corolario lógico, las relaciones políticas.

LA TENDENCIA HACIA LA INSTITUCIONALIZACION TECNOCRÁTICO-AUTORITARIA

Como es conocido, aunque el régimen balaguerista estaba formalmente considerado como un gobierno democrático-liberal y representativo —tal y como consigna la Constitución de 1966—, de hecho durante sus doce años de vigencia predominaron prácticas muy distantes de los formalismos legales propios de esta forma de Estado capitalista. La acertada denominación de Cassá —“bonapartismo dependiente”— resume el contenido autoritario de un Estado destinado a desempeñar difíciles tareas de contrainsurgencia, de modernización capitalista dependiente y de promoción de sectores burgueses sobre una base socioeconómica arcaica y en medio de una fuerte lucha popular²⁹.

La apertura democrático-liberal de 1978 implicó una ampliación de las libertades públicas y un intento de institucionalización del Estado y la sociedad civil, único y magro fruto de la promesa de cambios que aglutinó a las masas populares tras las banderas blancas del PRO. Los atractivos discursos democratizantes, algunos pasos efectivos en cuanto a las libertades públicas y el retiro de los militares de los cuarteles, incitaron la euforia de algunos malos lectores de Gramsci, para quienes se estaba asistiendo al inicio de un período caracterizado por “una mayor delimitación de las fuerzas hegemónicas para la organización del consenso

²⁹ Roberto Cassá: *Modo de producción, clases sociales y luchas políticas*, Punto y Aparte Editores C. por A., Santo Domingo, 1983.

activo de las clases subalternas”³⁰ o, con un tono menos optimista, a “una redefinición del bloque en el poder” que acentúa “el recurso del consenso respecto a la coerción en su estrategia estatal “³¹.

El resultado democrático-liberal de 1978 fue un producto de la confluencia de voluntades sociales disímiles sobre una coyuntura, resultado táctico para las clases dominantes y especialmente para el emergente gran capital local. Para este se trataba de un cambio del estilo político bonapartista por otro en que a partir de su acceso directo a las áreas estatales de decisión real, poder instrumentar una política económica estrictamente ajustada a sus intereses fraccionales y a la lógica del capital transnacional. Y en perfecta concordancia, se trataba también de un proyecto político impulsado por el imperialismo para canalizar el descontento popular e instaurar, como ha sido pregonado con insistencia, “la democracia funcional más grande del Caribe”, concepto que, como luego veremos, tiene, poco que ver con el “consenso activo de las masas”.

Para hablar en los propios términos de Gramsci, no se distinguía “entre los movimientos orgánicos (relativamente permanentes) y los movimientos que pueden llamarse de coyuntura (y que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales); es decir, se daba una confusión “entre lo que es orgánico y lo que es ocasional” exponiendo “como inmediatamente activas causas que lo son, en cambio, mediatamente, o afirmar que las causas inmediatas son las causas eficientes únicas”³².

De cualquier manera, los hechos, siempre tercos, se han ocupado de desmentir los alegres vaticinios sobre “hegemonías” y “consensos activos”. Desde fines de 1980 se viene produciendo en la República Dominicana un constreñimiento gradual de las libertades públicas y un ascenso de los niveles represivos. Particularmente durante el gobierno de Jorge Blanco se ha venido verificando el aparentemente extraño fenómeno —citando al periodista Álvarez Vega— “de una nación dirigida por un prestante abogado donde sus funciones en el área jurídica están perdiendo su sensibilidad por lo legal”³³.

Personalidades y organizaciones progresistas han reiterado públicamente sus denuncias acerca de actuaciones ilegales del gobierno que atentan contra los breves espacios democráticos, mientras que la oposición conservadora ha resaltado supuestas “torpezas” técnicas y frecuentes zigzagueos y retrocesos en las tomas de decisiones. No se puede negar que el gobierno de Jorge Blanco ejerce lo que Foucault hubiera llamado “una mala economía del poder”. No pudiera ser de otra manera para un gobierno programado para administrar una crisis cada vez más profunda, pero sin capacidad para tomar decisiones paliativas efectivas y en medio de un sinnúmero de presiones y exigencias sociales provenientes de todo el espectro

³⁰ Pedro Cattrain: “Estado, hegemonía y clases dominantes en República Dominicana”. En *Realidad contemporánea* nros. 18 y 19, Santo Domingo, 1982, p. 34.

³¹ Varios: La crisis del 17 de mayo de 1978 y el Estado dominicano. CERESD 11, UASD, Santo Domingo, p. 326.

³² Antonio Gramsci: Antología (comp. Manuel Sacristán). Siglo XXI, México, 1984, pp. 411-412.

³³ *La Noticia*, 6 de febrero de 1985.

social, desde las masas populares realmente afectadas por la crisis hasta los grandes grupos financieros, insaciables en su hartazgo económico y renuentes a perdonar lo que aún consideran “excesos populistas” del perredeísmo.

Sin embargo, nos quedaríamos en la superficie del fenómeno si no atendiéramos al hecho de que en la República Dominicana no sólo tiene lugar la destrucción de la magra apertura liberal de 1978, sino también un incipiente proceso de institucionalización de un nuevo orden antidemocrático y autoritario, aun cuando conserve la máscara demoliberal. Esta institucionalización, que convencionalmente llamaremos tecnocrático-autoritaria, tiene sus bases en las propias necesidades de la acumulación capitalista, algunas de cuyas características hemos ido delineando en páginas anteriores. No es únicamente —ni siquiera principalmente— un problema que pueda remitirse a la vocación antidemocrática de una clase, ni a “lo político” *strictu sensu*. Si observamos detenidamente el marco de contradicciones gran capital-gobierno que se desarrolla durante los gobiernos perredeístas, incluso en el actual, cuando ese gran capital ha obtenido patente de corso para una desenfrenada acumulación, podremos observar que las exigencias de estos sectores no se dirigen únicamente a la creación de condiciones para la ganancia inmediata, sino sobre todo a asegurar lo que José Miguel Bonnetti —integrante de un poderoso grupo económico— denominaba “la coherencia estatal”, es decir, no sólo la continuidad política, sino “la continuidad de las políticas”³⁴.

La instrumentación de un nuevo patrón de acumulación es impensable sin una participación activa y decisiva del capital imperialista, y por ello es una participación condicionada a la existencia de condiciones óptimas que no pueden limitarse a la promulgación de códigos inversionistas. Se requiere mucho más: estabilidad de las políticas impermeabilizadas de las exigencias populares y de otros sectores sociales cuyo sacrificio es indispensable; se requiere un margen amplio de lo que Guillermo O'Donnell ha llamado “garantía de la predecibilidad”³⁵.

Como observaremos más adelante, esto supone importantes cambios en las instituciones estatales, en el adoctrinamiento ideológico, en los principios normativos de la política, etc. Quizás ningún hecho demuestre con mayor vehemencia la dramática potencialidad antidemocrática de la evolución política nacional que la famosa propuesta de Balaguer en julio de 1984 en la perspectiva de crear un gobierno bipartidista, “un gobierno de unidad nacional [...] que utilice en los cargos públicos a las personas más capacitadas del país, que

³⁴ *Listín Diario*, 24 de julio de 1983.

³⁵ Guillermo O'Donnell: “Reflexiones sobre las tendencias de- cambio del Estado burocrático-autoritario”, En *Revista Mexicana de Sociología*. UNAM, enero-marzo de 1971. Las acusaciones del gran capital contra el perredeísmo acerca de excesos populistas y otros argumentos similares se insertan en esta lógica, como también se insertan la oposición a nuevos impuestos, como es el caso del debatido recargo cambiario del 36%. Aun cuando en estas oposiciones han existido también intereses corporativistas, es un hecho que la lógica perredeísta ha practicado estilos dañinos a esta “predecibilidad”, tales como la desmedida corrupción oficial, la necesidad de atender clientelas políticas con fondos estatales y el intento de hacer emerger un sector financiero como apoyo incondicional a su gestión, de lo cual el caso de Leonel Almonte es sólo una muestra relevante.

busque soluciones patrióticas a los problemas del país y no simplemente políticas”³⁶. Diferentes voces de la derecha y la ultraderecha se alzaron para considerar la propuesta balaguerista como la clave para la salvación nacional, e incluso se hicieron sugerencias concretas para encabezar este gobierno, entre ellas el director del *Listín Diario*, don Rafael Herrera, y el político ultraderechista Luis Julián Pérez.

Hasta el siempre flotante Bernardo Vega elogió la iniciativa en un largo artículo donde se pronunciaba por seguir el modelo del acuerdo de Punto Fijo en Venezuela, base de la componenda política de las clases dominantes tras el derrocamiento de Pérez Jiménez. “El logro de este acuerdo”, decía Vega, “fortalecería la democracia dominicana. De su negociación no saldrían perdedores excepto aquellos que no creen en esa democracia y desean su sustitución por otro sistema de gobierno”³⁷. O más, claramente, como afirmaba el dirigente reformista Juan Manuel Taveras, “una retranca de larguísimo plazo para los abanderados del marxismo leninismo que tratan de alcanzar el poder”³⁸. Recuérdese lo que generalmente implica el término “marxismo-leninismo” en las cavernas mentales de un ultraderechista tropical.

EL AFIANZAMIENTO DEL CONTROL DEL GRAN CAPITAL SOBRE LOS MECANISMOS ESTATALES Y LA TENDENCIA A LA TECNOCRATIZACIÓN

El proceso de tecnocratización del Estado dominicano, aunque incipiente, es un proceso en marcha y que afecta no sólo las estructuras institucionales, sino que incluso permea la esfera ideológica con la difusión de un discurso pragmático que proclama como metas finales una sociedad basada en la racionalidad y la eficacia administrativa, en la realización individualista en medio de la brutalidad de la “magia libre del mercado” y en un anacrónico concepto de la libertad como ausencia de obligación del hombre frente a sus conciudadanos. Parte de un difícil proyecto de legitimación que logra alcanzar ciertas elaboraciones teóricas como aquellos cánones para la salvación que uno de los más brillantes intelectuales orgánicos del gran capital, Frank Moya Pons, delineara en una charla pública:

En esta nueva época de crisis en la que hemos entrado, solamente sobrevivirán los que entiendan las limitaciones de la economía dominicana y los que sepan aprovechar con sentido práctico y sin ilusiones ideológicas las nuevas oportunidades que se están abriendo con el desarrollo de una nueva economía basada en las exportaciones [...] Yo creo que lo que más le conviene a la República Dominicana, por más herético que esto suene, es el aceleramiento de la modernización que implica la norteamericanización para sacar las mayores ventajas que podamos como lo hizo Puerto Rico en su momento, aunque tengamos diferentes sistemas jurídicos y políticos.

³⁶ Listín Diario, 2 de julio de 1984.

³⁷ Listín Diario, 18 de agosto de 1984.

³⁸ La Noticia, 15 de octubre de 1984,

Para concluir con una metáfora de tristes implicaciones: “somos un meteorito que va a toda carrera hacia el océano de la norteamericanización [...] hay que empezar ya a diferenciar lo ideológico de lo práctico, de lo tecnológico, de lo económico”³⁹.

En el plano institucional la tecnocratización se expresa, en primera instancia, en la invasión del aparato económico del Estado por una pléyade de figuras orgánicamente vinculadas al gran capital transnacionalizado, a cuya cabeza se encuentran aquellas personas que el CNHE consideró idóneas para acompañar a Jorge Blanco en su gestión gubernamental. Sin embargo, no es este el aspecto que más nos interesa discutir. Más ocultas, por encima de las querellas partidistas, ajenas a los trajines electorales, se crean nuevas áreas de decisión, se fortalecen otras y se conectan entre sí por circuitos por donde circula el verdadero poder, en desmedro de las obsoletas instituciones liberales, reducidas así a un mero cretinismo. En resumen, se trata de la consolidación de un poder real, en lo fundamental sustraído de las opciones electorales, vedado para los manejos populistas, garantía de la “continuidad de las políticas” que predicaba el multimillonario Bonetti.

Quizás el ejemplo públicamente más conocido, por sus actos estridentes, sea el del Banco Central de la República.

El Banco Central fue creado en 1947 como una institución autónoma, facultado para emitir moneda y regular su canje, así como para controlar el sistema bancario y financiero nacional cuyo órgano superior es la Junta Monetaria. Tradicionalmente, y sobre todo a partir de los 60, la Junta Monetaria fue lugar de concertación de grandes empresarios y funcionarios públicos dedicados a trazar la política monetaria de la nación, sin rebasar los límites constitucionales que, entre otras cosas, estipulan la sanción congresional de dos tercios de sus miembros para cualquier alteración del régimen legal del peso dominicano⁴⁰.

Sin embargo, durante todo el período balaguerista la Junta Monetaria desempeñó un papel discreto en la vida económica nacional, mientras que bajo el gobierno de Guzmán las tendencias monetaristas dentro del Banco Central fueron contrariadas por el Ejecutivo, lo que provocó tensiones entre el Presidente y el gobernador del Banco, Carlos Despradel.

Entre las metas del CNHE para las elecciones de 1982 estaba situar una figura ligada al capital financiero en la gobernatura, lo que se logró con el economista y empresario Bernardo Vega. Desde antes de tomar posesión del cargo, como señalábamos antes, Vega formuló un plan de ajuste neoliberal que tenía sus mecanismos claves precisamente en la esfera monetaria (tasa cambiaria, tasas de interés, etc.) y que fue mantenido en estricto secreto hasta su revelación meses más tarde por un periódico local⁴¹.

³⁹ Frank Moya Pons: “La sociedad dominicana contemporánea”. En *Ahora*, mayo de 1985. p. 18.

⁴⁰ *Constitución de la República Dominicana*, Art. 112. Santo Domingo. 1966.

⁴¹ *La Noticia*, 12 al 23 de octubre de 1983.

A partir de agosto, la Junta Monetaria se convirtió en un núcleo de poder decisivo en la política económica, al punto de generar una devaluación administrativa de la moneda dominicana que fue culminada en enero de 1985 con el traspaso del petróleo al mercado cambiario paralelo. Hacia agosto de 1984, cuando ya Vega había sido relevado de su eficaz gestión monetarista, componían la Junta Monetaria —además del Gobernador del Banco Central y de los secretarios de Finanzas y de Industria y Comercio, los empresarios Hugo Guilliani y José A. Najri— otros seis miembros titulares. De estos, cinco eran integrantes de alguna de las grandes familias y dirigentes de poderosas asociaciones burguesas, y el sexto un tecnócrata ligado al mismo medio⁴².

La Junta Monetaria, sin embargo, constituye sólo la punta de un iceberg' en formación, un blanco muy visible al que —dada su ingrata misión de ejecutar “las medidas poco simpáticas— se dirigen las críticas y denuestos. Por debajo se conforman nuevos núcleos de concertación y organización de los intereses del gran capital, de tomas de decisiones fundamentales para el futuro nacional, y se articulan circuitos múltiples por donde circula el verdadero poder, impermeabilizado de “las inconveniencias de la democracia”. Baste observar la reestructuración que viene sufriendo desde la presidencia de Guzmán la Secretaría de Industria y Comercio para sentir la complejidad de un fenómeno que requiere la atención de los científicos sociales. Creada en 1935, la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), preside en 1985 unas ocho organizaciones claves en la programación económica, entre ellas los directorios de desarrollo agroindustrial e industrial, el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CORDE, la Comisión Promotora de Nuevas Inversiones Extranjeras (COMIEX), las comisiones de zonas francas y de políticas minera, etc., al mismo tiempo que bajo su sombra se crean nuevos organismos al estilo de la Comisión de Información para las Normas de Comercio Exterior, para citar sólo algunos ejemplos. Además, la SIC participa en otros trece organismos como la Junta Monetaria, INESPREE, FIDE, el Directorio de Registro de Inversiones Extranjeras, entre otros.

A través de estas comisiones y directorios, la SIC no sólo ampliaba su esfera de acción, sino que ejecutaba esa acción a partir de una precisa concertación con los tecnócratas del gran capital presentes en esas organizaciones.

A modo de ilustración, enfatizamos una de ellas: la Comisión Promotora de Nuevas Inversiones Extranjeras. La COMIEX fue creada en 1982, pero sólo en 1984 entró plenamente en funcionamiento como “la llave maestra en la labor puerta a puerta para atraer inversionistas privados y extranjeros”⁴³.

Su misión declarada sería formar un ambiente propicio para las inversiones, orientar programas de desarrollo priorizados, identificar nuevas oportunidades de promoción en el país y a nivel internacional. Su junta directiva se compone del Secretario de Industria y Comercio, el Gobernador del Banco Central, el Subsecretario de Relaciones Exteriores para

⁴² Banco Central de la República Dominicana: *Boletín mensual*, agosto de 1984.

⁴³ *Listín Diario*, 30 de mayo de 1985

la Política Económica y trece figuras del mundo empresarial, incluyendo el expresidente del CNHE, Hugh Brache⁴⁴. La COMIEX recibe financiamiento de la AID y es asesorada por la *International Bussines and Economic Research Corporation, de Washington*, que ha realizado un trabajo similar en Jamaica.

La COMIEX se vincula con otros órganos del Estado y comisiones. Así, junto al Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX), otro organismo revitalizado y dirigido por un empresario y economista orgánicamente vinculado al CNHE, Eduardo Tejera, la COMIEX integra el Comité Interinstitucional para la Identificación y Promoción de Oportunidades de Inversión (CIPROIN), donde también se dan cita organismos de financiamiento y programación de la Secretaría Técnica de la Presidencia y de la Secretaría de Agricultura⁴⁵. Casi huelga señalar que en estas madejas de organismos, comisiones, circuitos de poder concentrados, hay un hilo conductor muy sugerente: la monótona repetición de apellidos “prominentes” y de sus asalariados.

De singular interés resulta evaluar cómo el mito de la eficiencia tecnocrática puede operar como virtual paralizador de los programas redistributivos. El caso de la Reforma Agraria es un ejemplo de ello. Desde el gobierno de Guzmán fue evidente que el criterio reformista sobre el agro sería sustituido por otro fomentalista que, según un dirigente de la Asociación de Hacendados, debía “descansar en un reducido grupo de productores altamente eficientes, con altas inversiones y modernas tecnologías”⁴⁶. Si la burguesía impuso al nuevo gobierno un test case administrativo en lo referente a la austeridad presupuestaria, el problema agrario iba a obrar como, diagnóstico preventivo de cualquier “exceso populista”. Como señalaba uno de los más brillantes ideólogos de la gran burguesía, Rafael Herrera, “una reforma agraria casi nunca es democrática; exige una fuerte y totalitaria intervención del Estado. Una reforma agraria produce satisfacciones de tipo político que no tienen que ver con los rendimientos económicos. Pero, sobre todo, la reforma agraria es sólo parte de un proceso de desarrollo global y sólo tendrá éxito en la medida de su articulación con el resto del proceso”⁴⁷.

El predominio de este tipo de concepción ha determinado la virtual sustitución de los planes redistributivos por otros, fomentalistas, que según el exsecretario de Agricultura, Domingo Marte, eliminarían el paternalismo y darían mayor dinamismo a la agricultura con la creación de empresas mixtas empresarios-Estado-campesinos, donde los primeros administran, el segundo financia y asegura y los terceros trabajan, con una supuesta ampliación de beneficios para todos⁴⁸.

⁴⁴ *El Sol*, 22 de febrero de 1985.

⁴⁵ *Listín Diario*, 30 de mayo de 1985. No es casual que el nuevo embajador norteamericano, Lowell Kilday, halla calificado como “magnífica” la labor realizada por la SIC (*El Nuevo Diario*, 28 de noviembre de 1985).

⁴⁶ *El Sol*, 26 de mayo de 1983.

⁴⁷ Rafael Herrera: “Ideas y opiniones sobre la reforma agraria”. En *Forum* 3. Santo Domingo, 1982, p. 46.

⁴⁸ *Última Hora*, 27 de junio de 1984.

Las últimas tendencias observadas en el sector agropecuario indican un proceso de paulatina tecnocratización. Según el empresario Luis Crouch, la implementación de “arreglos institucionales que podrían buscarse para administrar las acciones que pudieran ejecutarse”, tomando como referencia otras áreas “donde comisiones especiales dotadas de recursos y poder, han alcanzado objetivos realmente impresionantes”. En otras declaraciones, afirmaba que la solución radicaba en constituir una burocracia administrativa compuesta por “personas que entiendan los problemas y las limitaciones del agro dominicano”⁴⁹.

No podríamos concluir estas ideas sobre la tendencia hacia la tecnocratización del Estado dominicano sin referirnos a la otra cara de la moneda: la ya mencionada obsolescencia de instituciones liberales o tradicionales no integradas a los circuitos básicos de poder, al menos temporalmente. Quizás de todas estas instituciones sea el Parlamento la más afectada. De hecho el Congreso dominicano, aquejado de múltiples contradicciones internas, se ha visto marginado inconstitucionalmente de la toma de importantes decisiones, entre ellas los acuerdos con el FMI, la devaluación monetaria y otras de menor cuantía, pero que marcan el pulso de la situación —como es el caso de la concesión a una empresa extranjera del histórico “Hotel Jaragua”. La actual evolución de esta institución paradigmática de las democracias liberales apunta al despojo de atributos y a la acentuación del cretinismo de que ha hecho gala durante el gobierno jorgeblanquista, sobre todo cuando en las próximas elecciones es muy probable que ningún partido alcance mayoría absoluta. Sin embargo, al mismo tiempo se observa un esfuerzo por someter al Congreso a una mayor disciplina, un ritmo menos convulso y más afín con el nuevo orden político. Así, según una denuncia del Partido Comunista Dominicano, el gobierno norteamericano había establecido en el país un centro de Estudios Legislativos bajo el doble patrocinio de la Embajada y de la Universidad Católica Madre y Maestra, como un “mecanismo de información e intervención directa sobre ese poder del Estado”⁵⁰.

Otros hechos pudieran mencionarse en el sentido antes apuntado: la frecuente renuncia de altos funcionarios frente a la denominada “intolerancia oficial”, la sustracción al debate público y formal o informal de tópicos neurálgicos de la política nacional, las presiones contra la prensa y los medios de difusión, el abusivo empleo de la propaganda manipulada, etcétera.

Obviamente, esta tendencia a la tecnocratización del Estado no puede ser considerada como un proyecto político organizado y coherente, y mucho menos como un proceso acabado e irreversible. Aun cuando opera como tendencia importante, está sujeta a revocaciones

⁴⁹ *Listín Diario*, 14 de abril de 1985.

⁵⁰ *Listín Diario*, 17 de abril de 1985. El relegamiento de ciertas áreas del Estado a un mero poder formal patrimonio de sectores burgueses desplazados o simplemente para el entretenimiento de la opinión pública, también es observable en el aparato administrativo. Un ejemplo de ello es el documento emitido por ONAPLAN, vinculado a la Secretaría Técnica de la Presidencia, con el ambicioso título. “Lineamientos de política económica y programa de inversiones públicas” (enero de 1983). donde se proponía un modelo desarrollista de corte keynesiano muy distante de la estrategia neoliberal en curso. En mayo de 1983 la propia Secretaría lo declaraba listo para ser presentado al ejecutivo. Luego se esfumó y sólo existe en algunas bibliotecas y archivos para interés de los académicos.

parciales y a los vaivenes del sistema político local, y en última instancia a las inestabilidades de cualquier proceso de ensayo-error. De aquí que cualquier apreciación concreta al respecto puede resultar apresurada.

Hemos dejado para un tratamiento diferenciado al aparato estatal más rigurosamente tecnocratizado en los últimos años, que por su especificidad constituye un pivote básico de la estructuración tecnocrático-autoritarista: las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

EL VERDADERO SENTIDO DE LA “PROFESIONALIZACIÓN”

Cuando Don Antonio Guzmán se hizo cargo del gobierno, uno de sus primeros pasos fue renovar los mandos militares y comenzar la llamada profesionalización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (FAS), para lo cual contó con el valioso concurso del general norteamericano Dennis Mc Auliffe, entonces jefe del Comando Sur y de un grupo de asesores bajo su mando⁵¹.

La “profesionalización” de las FAS no significó en lo fundamental una ruptura, sino una continuidad en el proceso de transformación de los cuerpos militares y paramilitares que tuvo lugar desde 1965, cuando también bajo la asesoría norteamericana se produjo la reorganización, el pertrechamiento y el adoctrinamiento en función de los planes de contrainsurgencia. Sin embargo, dadas las características del régimen balaguerista, las FAS fueron sometidas al rejuego político del experimentado caudillo mediante ascensos arbitrarios, enfrentamientos de clanes castrenses, etc., lo que de hecho limitaba las capacidades de acción política y sometía a los mandos a un nivel de querellas partidistas y lealtades políticas estratégicamente peligrosas.

El ascenso al poder del PRO en 1978 tenía obligatoriamente que introducir cambios al respecto. En primer lugar, el ensayo democrático-liberal programado por el PRO —prácticamente la única promesa que quedó en pie de sus aprestos revolucionarios y nacionalistas— requería pasar a retiro a los mandos castrenses balagueristas que eran proclives a posiciones golpistas. En segundo lugar, pero de mayor importancia, la vuelta de los militares a los cuarteles implicaba un temporal “retiro espiritual” necesario para una remodelación técnica, ideológica y legitimadora en el nuevo orden.

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad podían proyectarse así como garantes y condicionadoras del Estado burgués dependiente de corte civil, y no —como había sucedido durante el balaguerismo— de un gobierno caudillista. Alejadas de los pedestres regateos partidistas, las FAS podían ser adecuadas a las necesidades de reproducción del nuevo esquema de acumulación en condiciones óptimas. A este proceso de adecuación se le dio el eufemístico nombre de “profesionalización”.

⁵¹ Juan Bosch: *El Partido: concepción, organización y desarrollo*, Editora Alfa y Omega, Santo Domingo, 1983, p. 68.

Antes de explicar con más detenimiento el contenido de la “profesionalización” de las FAS, es importante recalcar que ella estuvo determinada por la política imperialista en la región. Desde 1978 esta política tuvo en la República Dominicana —proyectada como “la democracia funcional más grande del Caribe”, para recalcar la definición del vicepresidente George Bush— un pontón fundamental, tanto por la importancia territorial, económica y demográfica del país en el área, como por sus posibles conexiones con otras naciones caribeñas -especialmente con Haití, en virtud del denunciado pacto secreto firmado durante el gobierno de Guzmán y que aseguraría la intervención de tropas dominicanas en caso de insurgencia popular en la patria de Toussaint Louverture. A partir del giro belicista de la política norteamericana hacia la Cuenca del Caribe —desde los últimos años del gobierno de Carter—, las FAS se han proyectado más abiertamente como parte del engranaje de dominación geopolítica imperialista, aun desde agosto de 1982, en contradicción con la retórica más independiente de la Cancillería dominicana.

A partir de sus intereses geopolíticos regionales y de su valoración estratégica acerca de República Dominicana, los Estados Unidos han sido un eje básico de la militarización de la sociedad dominicana, como financiadores del equipamiento militar y condicionadores políticos, sobre todo a partir del momento en que la crisis socioeconómica amenaza convertirse en una crisis política de envergadura, según quedó demostrado en abril de 1984.

Un primer aspecto de la profesionalización, que por razones de espacio no podemos explicar con todo detalle, es el vertiginoso proceso de equipamiento militar que tiene lugar desde 1978 (y particularmente desde 1982) en todas las ramas militares y en los cuerpos paramilitares, y que por momentos da la impresión de un pertrechamiento bélico que desborda las necesidades domésticas de dominación.

Flotillas de helicópteros U.H. “Huey” y “Bell” 205-A-1; de aviones “T-34-B” y “A-37” (los conocidos Dragonfly); embarcaciones guardacostas valoradas en tres millones de dólares cada una; modernos equipos de infantería; creación de nuevas bases militares —navales y terrestres— y de nuevas brigadas, incluyendo una, la IV, a sólo 86 kilómetros de la frontera con Haití y conectada con esta por una excelente carretera, son sólo algunos datos públicamente conocidos de un tramado seguramente más complicado y engarzado a los planes de represión interna y a la política agresiva norteamericana.

Según reconociera el general Ramiro Matos, cuadro militar clave en el actual reordenamiento y reconocido especialista en contrainsurgencia y contrainteligencia, sólo durante el primer año de gobierno del “civilista” Jorge Blanco se había adquirido el mayor volumen de equipos militares desde la muerte de Trujillo, y las FAS habían alcanzado un grado de tecnificación sin precedentes⁵².

⁵² *El Nuevo Diario*, 24 de agosto de 1983.

La función de las FAS en el nuevo esquema político puede palpase en las cifras, siempre subvaluadas, del presupuesto nacional. Desde 1979 el presupuesto de las FAS tiende a crecer en términos no sólo absolutos sino relativos. Si en ese año su presupuesto ascendía al 16,6% del presupuesto nacional, en 1982 era del 20,1%. Según cálculos preliminares, ascendía al 17,2%, pero en 1984 se reportaba un desembolso del 22,2% respecto a la ejecución total, manteniéndose el mismo porcentaje para 1985. Es interesante anotar que al mismo tiempo crece la proporción de los gastos de policía respecto a los de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Si en 1979 los primeros eran el 51 % de los segundos, en 1984 alcanzaron el 79% y en 1985 se programaba un 74,1%⁵³.

Otro aspecto significativo de la “profesionalización” ha sido la emergencia a las altas jerarquías de cuadros especializados en contrainsurgencia y contrainteligencia, políticamente ubicables en una “línea dura”. Es sintomático que esta tendencia se ha acelerado a partir de las primeras manifestaciones de la activación del movimiento popular, principalmente en agosto de 1983 y en varios momentos a partir de abril de 1984.

A nivel ideológico, la “profesionalización” ha hecho énfasis en la elaboración de un discurso por parte de los mandos militares que tiene muchos lugares comunes con la Doctrina de Seguridad Nacional y la retórica reaganista. En torno al papel de las FAS como presunta salvaguardia de la nación frente a enemigos internos y externos identificados con el comunismo, se agrega una propaganda manipuladora en la que, echando en saco común las protestas populares y los delitos comunes, se anuncia un proceso de “descomposición social”, que según un editorial del conservador *Listín Diario* sólo podía ser evitada por “timoneles expertos iluminados algunos por la gracia divina”; es decir, se procede a una deformación de la opinión pública mediante lo que Chervaut llamaría “la hipertrofia de los riesgos”, cuya finalidad sería la legitimación de la paulatina militarización de la sociedad en el marco de una democracia constreñida. Aquel propósito anunciado de la “profesionalización”, la vuelta de los militares a los cuarteles, parece más lejano que nunca, aun cuando esta presencia sea menos grosera, más “profesional” que durante el balaguerismo. Baste citar algunas cifras para palpar la magnitud del problema. Tras la horrenda matanza perpetrada en abril de 1984, las calles dominicanas han sido preventivamente militarizadas en más de una ocasión, y se han desatado olas represivas contra dirigentes populares y de izquierda. Sólo entre enero y mayo de 1985 fueron allanados violentamente cinco locales del Partido Comunista Dominicano. En febrero del mismo año fue cercada la casa del expresidente Juan Bosch, líder del Partido de la Liberación Dominicana, al tiempo que varios dirigentes de ese partido eran encarcelados. Sectores sociales medios, como los propietarios de las casas de cambio y los comerciantes minoristas, también han sufrido la represión policíaca. La actividad represiva es sistemática y diaria: entre agosto y octubre de 1984 fueron muertas por la policía unas veinticuatro personas, principalmente por “confusiones” y “altos no acatados”⁵⁴.

⁵³ ONE: *República Dominicana en cifras*, 1983; *La Noticia*. 16 de enero de 1985.

⁵⁴ *La Noticia*, 20 de octubre de 1984.

La presencia castrense en los medios de difusión masiva se ha incrementado a niveles inusuales. En noviembre de 1984, para citar un solo ejemplo, los principales jefes militares encabezados por el teniente general Cuervo Gómez concurren en alegre tropel al programa “Aeromundo”, del periodista Guillermo Gómez, orgánicamente vinculado a la Embajada norteamericana y a la ultraderecha local. Tras advertir que las FAS no permitirían la acción de anarquistas que quieren sembrar el caos en la sociedad dominicana, lanzó duros ataques contra la Universidad estatal, los partidos de izquierda y otras instancias opuestas a la política gubernamental. Según Cuervo Gómez, estaban en marcha una serie de planes asistenciales para los integrantes de los cuerpos armados y una Escuela Superior “donde se planifica, se estudia y se hacen recomendaciones acertadas para la decisión del señor presidente de la República”⁵⁵.

LAS PERSPECTIVAS

Como pocas veces en su historia, el proceso político dominicano sufre hoy una vertiginosa acumulación de acontecimientos que hace muy inseguro cualquier intento de pronóstico a corto plazo. De hecho, desde abril de 1984 se hicieron visibles en el panorama político los febriles intentos de los partidos políticos del sistema por lograr una recomposición de liderazgos y una perfilación estratégica con vista a las elecciones de mayo de 1986. Describir los vericuetos de las actividades desplegadas en ese sentido rebasa el objetivo de este artículo. Sin embargo, podríamos anotar algunas características generales imprescindibles para entender cuál será el resultado de las elecciones.

Es indudable que desde la explosión de abril los líderes de los principales partidos políticos pudieron calibrar la verdadera magnitud de la crisis social y sus impredecibles consecuencias políticas, aun cuando también estaba sobre el tapete el hecho de que el movimiento popular no estaba en condiciones de presentar un proyecto autónomo ni de generar a corto o mediano plazo una situación revolucionaria. La debilidad organizativa y la indigencia programática del movimiento popular dejaban un amplio margen a las fuerzas políticas del sistema para sus maniobras. de regateo y cooptación, sobre todo si tenemos en cuenta la apertura de un período preelectoral con sus expectativas, planes asistenciales y movilizaciones.

Un primer intento de recomposición, hasta el momento el más efectivo, viene produciéndose en la ultraderecha local encabezada por el Partido Reformista de Joaquín Balaguer. Es interesante anotar que tal recomposición transita el mismo camino trazado por el CNHE en sus varias veces citado informe de febrero de 1982. En primer lugar, Balaguer produjo una serie de reestructuraciones internas que afianzaban su poder personal y cercenaban el de los pequeños caudillos al estilo de Fernando Álvarez Bogaert, al mismo tiempo que favorecía el ascenso de figuras claves del empresariado y la ultraderecha local, como Jacinto Peynado (candidato a la Senaduría por el distrito), Enrique Peynado (secretario administrativo del Partido) y, sobre todo, de Donald Reíd Cabral, gran comerciante y máxima figura del

⁵⁵ *Listín Diario*, 17 de noviembre de 1984.

triumvirato que derrocó a Bosch en 1963, en cuyas manos fue depositada la estratégica comisión de organización y la realización de un proceso de reestructuración interna del partido. Según el propio Reid Cabral, se trataba de “echar de lado a los entorpecedores del reformismo” y de realizar una labor movilizativa y proselitista más intensa que sacara al reformismo de la abulia que le caracterizó en años anteriores.

En segundo lugar, el PR ha logrado aglutinar en torno suyo a toda la caterva de pequeños partidos de ultraderecha, incluyendo al Partido Quisqueyano Demócrata de Wessin Wessin. Un paso significativo al respecto fue la absorción del escuálido partido socialcristiano local, pero que le reportó la ventaja de ser reconocido por la Democracia Cristiana internacional como su agente en el país y de “ideologizar” el arcaico credo balaguerista.

En tercer lugar, el PR, montado sobre la crisis y la mala administración perredeísta, ha reactivado su presencia pública y ofrecido al electorado un discurso ciertamente demagógico, pero que en lo esencial ha recogido los principales alegatos críticos del gran empresariado contra el gobierno de Jorge Blanco: la hipertrofia de la burocracia, el dispendio presupuestario y la incapacidad administrativa⁵⁶.

Dentro del Partido Revolucionario Dominicano esta recomposición ha sido más difícil, dadas las usuales trifulcas de tendencias que caracterizan a los socialdemócratas domésticos. Sin embargo, un factor que debe destacarse es la súbita proclamación de José Francisco Peña Gómez como aspirante a la candidatura presidencial, en contra de los deseos expresos del presidente del Senado, Jacobo Majluta. Aunque la postulación de Peña por el PRD ha venido encontrando numerosos escollos y ha chocado con el control que ejerce su antagonista en la maquinaria partidista y el descenso de la popularidad del otrora fogoso “líder máximo”, su precipitada presentación como aspirante a la presidencia para 1986 revela un intento de recomposición de un liderazgo social reformista como respuesta a la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país. No se trata aquí de discutir las posibilidades reales de Peña Gómez para alcanzar la presidencia —teniendo en cuenta que, aun con todos los factores adversos, tiene a su favor su experiencia política, el apoyo de la Internacional Socialista, la anuencia (aun a regañadientes) de Washington y el recurso inestimable del apoyo gubernamental—, sino de calibrar que, en cualquier caso, su paso por la “silla de alfileres” no podría significar la hora de los grandes cambios socioeconómicos y políticos que desde su óptica socialdemócrata ha proclamado el dirigente perredeísta como la clave de la salvación nacional. El propio discurso electoral de Peña Gómez se ha mostrado cauto y muy distante de aquella retórica populista de años anteriores, y en cambio ha adoptado posiciones conservadoras, criticando al gobierno por su indecisión para tomar “medidas valientes de ajustes económicos”⁵⁷, elogiando a la ICC por reportar “todas las ventajas de UD estado

⁵⁶ Acerca del contenido del discurso del reformismo pueden consultarse las charlas emitidas en el Instituto de Formación Política de esa organización. (*El Caribe*, 13 de mayo de 1985).

⁵⁷ *El Nacional*, 20 de diciembre de 1984.

norteamericano, siendo una república independiente”⁵⁸ y aglutinando en torno suyo a figuras confiables del gran empresariado, como el economista Bernardo Vega. Quizás la exposición más clara de su mimetismo político la ofreció Peña en un discurso ante la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, donde anunció “un Estado socialista-democrático adaptado a las condiciones sociales e históricas de un país en desarrollo”, lo que remitió a “programas de inversiones agrícolas, protección a la industria nacional, desarrollo de mercado internacional, creación de una marina mercante, reforma fiscal, alfabetización y desarrollo del sistema de seguridad social”⁵⁹.

La mayor parte de los sondeos de opinión y encuestas realizadas indican la preferencia del electorado por Joaquín Balaguer, a pesar de su avanzada edad, de su visible deterioro físico y de que hace sólo ocho años fue objeto de un repudio masivo cuando intentó prolongar por un nuevo período su gestión semidictatorial. Distante de él, pero en un segundo plano, se ubica Jacobo Majluta, calificado como “un Balaguer joven” a partir de sus posiciones políticas conservadoras. Sin embargo, derivar de aquí la conclusión de que el electorado dominicano sufre un proceso de rechazización, puede resultar festinado y seguramente de un valor muy relativo. Las elecciones de 1986 amenazan con ser la más despolitizadas de 1966 hasta la fecha. Los temas políticos pasan a un segundo plano en el consenso público. Desde diferentes ópticas y posiciones, el electorado busca la solución al problema económico, lo que en muchos casos se refiere a cuestiones tan inmediatas como conseguir un empleo o detener el ascenso de precios de los productos básicos. A falta de proyectos estratégicos, se recurre a una mala memoria que describe una época en que la “siembra de varillas” producía millonarios y generaba puestos de trabajo, en que la economía crecía bajo la protección estatal, aun cuando esta es la misma época de la contrainsurgencia, “los incontrolables” y el despotismo caudillista. Es el viejo, simple y traumático dilema de que la democracia política no se come, y cuya solución puede favorecer a figuras como Balaguer o Majluta y deprimir a otros poseedores del típico estilo demagógico ensayado desastrosamente durante los dos últimos cuatrienios.

En el momento actual (noviembre de 1985) no es posible vaticinar un vencedor en las elecciones, lo cual indica la crítica situación política del país. Balaguer aún no ha seleccionado su candidato vicepresidencial, elección que siempre genera grandes tensiones en un partido donde casi nadie se atreve a desafiar al caudillo, pero donde casi todos aspiran a heredarle. El PRO se muestra más dividido que nunca, sobre todo después de una Convención llamada a escoger su candidato presidencial y que concluyó en un tranque sin soluciones a la vista. Los dos aspirantes principales se proclaman vencedores y se acusan de fraudes y violaciones. Las encuestas efectuadas muestran un alto porcentaje de indecisos respecto a las opciones existentes, lo que a escasos meses de las elecciones, y sin ningún partido en plena campaña, puede inducir virajes importantes. Para el imperialismo norteamericano, el perpetuo hacedor de la política dominicana, cualquiera de las opciones principales existentes puede resultar pragmáticamente aceptable, aun cuando dentro de ellas

⁵⁸ *El Nuevo Diario*, 22 de febrero de 1983

⁵⁹ *Listín Diario*, 4 de agosto de 1984.

preferiría las más conservadoras y alineadas con sus estrechas estrategias de dominación en el área.

Sin embargo, lo que más nos interesa destacar es que, cualquiera que sea la opción favorecida por el escrutinio; cualquiera que sea el discurso pronunciado el 16 de agosto de 1986, la República Dominicana evoluciona inevitablemente hacia una profundización de la crisis, con sus consiguientes repercusiones sociales y políticas. Si bien es cierto que los próximos meses deben servir de escenario a un relajamiento de las tensiones sociales y a un cierto reflujo de las protestas populares al calor de la campaña electoral, y debido al cuidado que debe poner el gobierno en la adopción de nuevas medidas recesionistas, no lo es menos que a partir de agosto de 1986 la entrada de una nueva fase de ajustes y el derrumbe de las expectativas generales acortarán notablemente la “luna de miel” que siempre disfrutaban los gobiernos recién estrenados.

Ciertamente, hay caminos, más allá de los fuegos artificiales de la ICC, del sombrío sometimiento a los dictados fondomonetaristas, de la orgía especulativa que hoy desangra la economía nacional. Pero transitar esos caminos exigiría a cualquier equipo gubernamental una voluntad política y una forma de conducción de los problemas nacionales muy distante de las formas tradicionales. Se trata, sencillamente, de poner a República Dominicana a la altura de los tiempos que hoy conmueven a Nuestra América,